Datos del Expediente

Carátula: SOBRINO JOSE C/ YANCOSKI RODOLFO RAMON Y MENOSSI OSVALDO S/
EJECUCION HONORARIOS

Fecha inicio: 04/12/2018

N° de

Receptoría: MP - 39262 - 2017

N° de

Expediente: 167047

Estado: Fuera del Organismo - En Juz.

Origen

REFERENCIAS

Sentencia - Folio: 879

Sentencia - Nro. de Registro: 167

04/07/2019 - SENTENCIA DEFINITIVA

Texto del Proveído

----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -----

REGISTRO N° 167-S FOLIO N° 879/89

EXPEDIENTE N° 167.047. JUZGADO N° 4.

En la ciudad de Mar del Plata, a los 4 días del mes de Julio de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "**SOBRINO, JOSÉ C/ YANCOSKI, RODOLFO Y MENOSSI, OSVALDO S/ EJECUCIÓN HONORARIOS**", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi, Roberto J. Loustaunau y Rubén D. Gérez.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Es justa la sentencia obrante a fs. 139/143?

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO:

I. En el fallo cuestionado el Sr. Juez *a quo* rechazó las excepciones deducidas y mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto los Sres. Yancoski y Menossi hicieran al acreedor, íntegro pago del capital reclamado, más los intereses allí establecidos.

Para decidir de ese modo, en primer lugar, desestimó la excepción de pago total interpuesta por el Sr. Yancosky, toda vez que el depósito efectuado en las actuaciones principales no fue suficiente por no incluir los intereses devengados desde la mora ni la suma en concepto de I.V.A. por el carácter de responsable inscripto del ejecutante.

Aclaró que el monto del depósito podrá ser deducido conforme prelación legal al momento de practicarse la liquidación respectiva.

Denegó, seguidamente, la excepción de falsedad planteada por el mismo accionado (que había sido fundada en la falta de liquidez y exigibilidad de la deuda), porque si bien es cierto que las partes se encuentran debatiendo en los autos principales acerca de la suma adeudada, esos planteos lo son al mero fin de determinar el monto efectivamente adeudado y las consecuencias de ellos son al solo efecto informativo, no siendo vinculantes para el presente proceso, por cuanto el ejecutante ha elegido esta vía para el pago de sus emolumentos.

Refirió, en lo atinente, a la defensa de inhabilidad de título opuesta por el coejecutado Sr. Menossi, también desestimada en el pronunciamiento en crisis (que había sido fundada en la concesión del beneficio de litigar sin gastos de manera definitiva y, además, en no haber sido el condenado en costas), que en función a la limitación del art. 84 del C.P.C.C. aquél debía pagar las costas causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que recibiera.

Indicó, por último, que los intereses sobre los honorarios reclamados debían liquidarse conforme a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a 30 días, con cita del art. 54 inc. "b" del dec. ley 8.904 (hoy art. 54 inc. "b" de la ley 14.967); y, sobre los gastos, conforme la tasa que regla el mismo Banco en sus depósitos a 30 días, vigente en los distintos períodos de aplicación, con cita del Ac. 43.858 de la S.C.B.A. *in re "Zgong Daniel R. y otro c/ Asociación Atlética Villa Gesell s/ cobro de australes"* del 21-5-1991 y art. 8 de la ley 23.928, desde el momento en que fueron efectuados.

II. Recurso del ejecutante:

II. a. El día 6-7-2018 apeló el Dr. Sobrino.

En el memorial presentado electrónicamente el día 8-8-2018 alegó la falta de tratamiento de la petición de aplicar a los intereses, la tasa activa prevista por el 54 inc. "b" del dec. ley 8.904/77 desde la mora y hasta la entrada en vigencia de la nueva ley de honorarios n° 14.967, y a partir del día 21-10-2017 en adelante, conforme la pauta indicada en el art. 54 inc. "b" de esta última normativa.

En otro punto, refirió que la sentencia no era clara habida cuenta que establecía que "*los intereses sobre los honorarios reclamados se liquidarán con la tasa activa (...)*", y acto seguido expresó: "*para sus depósitos a 30 días*", por lo que solicitó que este Tribunal la determinara conforme lo pretendido en el párrafo precedente.

Mediante el segundo agravio expuso que su parte no percibió suma alguna por los conceptos que se reclaman en autos, por lo que los depósitos realizados en la causa principal no revestían el carácter de "pago" ni estaban disponibles para su retiro por no cubrir lo normado por el art. 21 de la ley 6.716. Además, de no existir prelación legal alguna a su respecto.

II.b. El ejecutado Yancoski contestó los agravios en el escrito electrónico presentado el día 23-8-2018.

Pidió que se declare desierto el recurso, alegando que el escrito en responde no constituye una crítica concreta y razonada en los términos del art. 260 del C.P.C.

En segundo término, se opuso a que se considere "memorial" a la presentación realizada por el apelante el día 23-8-2018, toda vez que en el escrito de "apelación" del día 6-7-2018 el Dr. Sobrino limitó su agravio a los intereses a aplicarse a las sumas adeudadas.

De modo eventual, manifestó que la tasa de interés prevista en el art. 54 inc. "b" del dec. ley 8904/77 debe considerarse derogada por las normas que prohíben los mecanismos de actualización monetaria conforme la ley 23.928 (mod. por ley 25.561), por lo que la tasa de interés a utilizarse debe ser la pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos de plazo fijo a 30 días, de conformidad al precedente de la S.C.B.A. "*Isla, Sara C/ Provincia de Buenos Aires S/ Amparo*" (causa n° 71.770 del 10-6-2015).

En otro punto, afirmó que el depósito efectuado en las actuaciones principales fue puesto en conocimiento oportunamente y que fue el letrado ejecutante quien omitió requerir el libramiento de giro a su favor.

Por todo ello, pidió el rechazo del recurso de apelación deducido por el Dr. Sobrino, con costas.

III. Recurso del coejecutado Rodolfo Yancoski:

III. a. El día 30-8-2018 apeló la sentencia el Sr. Yancoski

En el memorial de fecha 23-9-2018 refirió que la defensa de pago parcial opuesta debe ser admitida porque el depósito que obra en la causa principal debe considerarse con efectos cancelatorios desde el día que quedó disponible.

En segundo lugar, expuso que a la fecha no se aprobó la liquidación del crédito practicada en esas actuaciones en concepto de intereses, por lo que debe admitirse la excepción de falsedad de la ejecutoria opuesta por no ser una suma líquida y exigible.

De manera subsidiaria, se agravio de los intereses determinados en la sentencia, en virtud de incumplir las pautas fijadas por la S.C.B.A. en el precedente "*Isla*" citado.

Sobre esto último, refirió que el art. 10 de la ley 23.928 dispuso la derogación de las normas que establezcan la indexación de precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, precios o servicios; todo lo que trajo aparejado la derogación implícita y tácita del art. 54 inc. "b" del dec. ley 8904/77.

Con base en lo anterior, manifestó que corresponde establecer que los intereses de los honorarios sean calculados con arreglo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se quejó de la condena en costas. Adujo la existencia de circunstancias que ameritan el apartamiento del principio rector fijado por el juez.

III.b. Corrido el traslado de ley, el Dr. Sobrino respondió los agravios el día 16-10-2018.

Manifestó que el referido depósito fue insuficiente por cuanto se regularon \$ 49.500 de honorarios, correspondiendo \$ 4.950 en concepto de aporte y \$ 10.395 en concepto de I.V.A. (total de \$ 64.845), por lo que queda en evidencia que el monto depositado de \$ 56.500 no es suficiente. Además, conforme el art. 504 inc. 3° del C.P.C., el pago debe ser total y acompañado por las constancias del juicio o los documentos emanados del ejecutante, todo lo que fue incumplido en el caso.

En relación al segundo agravio, expuso que el art. 497 del C.P.C. lo habilitó a ejecutar los honorarios que le fueron regulados.

En lo tocante al agravio referido a la tasa de interés, manifestó que conforme el precedente de la Sala I de la esta Cámara de Apelaciones en los autos "*Rendo, Emiliano H. c/ Labeguere, Carlos H. s/ cobro de honorarios*" (causa n° 160.135 RSD 20 del 23-2-2016), deberá estarse a la "tasa activa" conforme el art. 54 inc. "b" ley 8.904/77.

Finalmente, adujo que no hay razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota.

Por todo ello, pidió el rechazo del recurso apelación articulado por el ejecutado Yancoski, con costas.

IV. Recurso del coejecutado Osvaldo Menossi:

IV.a. Con fecha 1-10-2018 apeló el Sr. Menossi.

En el memorial presentado el día 4-10-2018 (v. fs. 168/169) alegó que si bien su parte obtuvo una sentencia favorable en los autos principales (condena a escriturar), aun no se hizo efectiva por causas imputables al Sr. Yancoski. Además, su parte no recibió bienes o valores, ni fue condenado en costas.

Por lo tanto, afirmó que no se dan las condiciones necesarias para aplicar el art. 84 del C.P.C., por lo que pidió la revocación de la sentencia apelada y consecuentemente, que se haga lugar a la excepción de inhabilidad de título planteada.

IV.b. En su responde del día 13-11-2018 el Dr. Sobrino afirmó que el memorial contiene meras disconformidades con lo resuelto, por lo que el recurso del Sr. Menossi debe rechazarse, con costas.

V. Antecedentes:

a. De los autos principales caratulados: "***Menossi, Osvaldo c/ Yancoski, Rodolfo s/ Cumplimiento de contrato***" (exp. n° 69.323 de trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 deptal., que en este acto tengo a la vista), se extrae que el día 2-12-2004 esta Sala (con una anterior

composición) dictó sentencia confirmando la de primera instancia en favor del actor quien, en su calidad de comprador de un inmueble que no estaba subdividido y por ende no se encontraba en condiciones de ser escriturado, demandó el cumplimiento del contrato y la escrituración (v. fs. 287/292 y 334/336).

b. El 17-11-2008 se aprobó la base regulatoria y se tarifaron los estipendios de los profesionales. Apeladas ambas materias la primera fue confirmada por esta alzada a fs. 463/466, en tanto que los montos de los honorarios fueron modificados a fs. 479 (v. fs. 404/407, 418 y 479 de la causa principal).

c. El recurso extraordinario de nulidad contra la base estipencial fue rechazado por la S.C.J.B.A. con fecha 19-12-2012, así como también el recurso extraordinario federal con fecha 26-6-2013 y, finalmente, el día 6-11-2013 se desestimó la revocatoria *in extremis* articulada en contra de esta última decisión (v. fs. 575/576, 598/599 y 608 de la causa principal).

d. El día **19-3-2014** se diligenciaron las notificaciones del "*por devueltos*" de la S.C.J.B.A. (v. fs. 613 y 614/615 de la causa principal)

e. Con anterioridad a las presentes actuaciones, el Dr. Sobrino intentó ejecutar los honorarios regulados, pretensión que a la postre fue rechazada en virtud de que dichos emolumentos no habían adquirido firmeza a raíz del trámite recursivo en la Corte bonaerense reseñado precedentemente (v. causa de este Tribunal n° 149. 838 RSI 377 del 29-8-2013).

f. Los depósitos realizados en los autos principales a fs. 637/639 fueron puestos de manifiesto al acreedor por medio del auto de fecha 13-10-2017 por la suma de \$56.500 (v. fs. 640/641 de la causa principal).

g. El 25-10-2017 el Dr. Sobrino practicó liquidación de los honorarios regulados y manifestó que el referido depósito no alcanzaba a cubrir el monto total de su acreencia: los emolumentos, los aportes, el I.V.A. ni los intereses que calculó a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la mora de fecha 1-12-2009 (v. fs. 644/651 de la causa principal).

h. Luego, practicó una nueva liquidación con fecha 29-11-2017 que mereció la impugnación del Sr. Yancoski del día 5-3-2018, lo que no ha sido resuelto aún (v. fs. 658/674 y 685/687 de la causa principal).

i. Este nuevo proceso de "*ejecución de honorarios*" fue iniciado por el Dr. Sobrino el día **26-10-2017**, trabándose la *litis* por la suma de \$54.450 (correspondientes a \$49.500 en concepto de capital -honorarios regulados- y \$4.950 de aportes, más \$16.335 fijados provisoriamente para responder a intereses y costas; v. fs. 79/80).

j. El Sr. Yancoski opuso la excepción de pago atento el depósito antes reseñado y de falsedad en virtud de que en las actuaciones principales se encuentra pendiente de decisión la liquidación impugnada. Por su parte, el Sr. Menossi dedujo la excepción de inhabilidad de título con fundamento en el beneficio de litigar sin gastos allí otorgado (v. fs. 96/100 y 125/126, respectivamente)

k. La sentencia que rechazó tales defensas, es lo que viene a revisión de este Tribunal.

VI. Consideración de los agravios:

VI.1. Recurso del coejecutado Rodolfo Yancoski:

VI.1.1.- Hemos tenido oportunidad de explicar, siguiendo los términos del art. 54 del decreto-ley 8.904/77 (de aplicación al caso conforme el art. 3 del Cód. Civ. y art. 7 del CCyC), que tratándose de honorarios regulados judicialmente los intereses se devengan desde la fecha de la constitución en mora y ésta se produce al vencimiento del plazo de 10 días corridos posteriores a la firmeza de la regulación.

Por tal razón, se ha interpretado que si los honorarios fueron apelados, los intereses comienzan a computarse después de los 10 días de notificada personalmente o por cédula la resolución de la cámara que los confirma o, en su caso, en igual término y por la misma forma de la providencia "por devueltos" (argto. Hitters-Cairo; "Honorarios de abogados y procuradores"; Lexis Nexis; Bs. As.; 2007; p. 607; esta Sala en causas nro. 142.589 RSI 151 del 31-3-2010; nro. 144.160 RSI 833 del 15-9-2009; nro. 133.101 RSI 729 del 14-12-2010, entre otras).

De los antecedentes relatados se desprende que la mora en el pago de los honorarios en ejecución se produjo a los 10 días corridos de quedar firme el auto regulatorio, y para dicho cómputo debe tenerse presente la fecha en que tuvo lugar la notificación del auto "por devuelto", esto es, el 19-3-2014 de conformidad con las cédulas obrantes a fs. 613 y 614 de la causa principal.

De tal forma, fue el día **30-3-2014** (y no el 1-12-2009 ni el 10-12-2008 como lo indicó el ejecutante en las sendas liquidaciones de fs. 644/651 y fs. 658/674, respectivamente, en la causa principal) en que los obligados al pago se constituyeron en mora, por lo que el depósito puesto de manifiesto el 13-10-2017 -es decir: más de 3 años y medio después (42 meses y 14 días)- por la suma de \$56.500 realizado por el Sr. Yancoski en los autos principales (v. fs. 641), no logra sostener la excepción de pago total articulada en autos (arts. 725, 742, 744, 750 y conc. del Cód. Civ.; art. 504 inc. 4. del C.P.C.C.).

Repárese que sólo de capital tenemos \$49.500, más \$4.950 de aportes, más los intereses pertinentes desde aquel 30-3-2014, (sobre lo que me expediré más adelante), de manera que los honorarios en cuestión eran -y son- exigibles por no haber sido cancelados dentro del plazo indicado previsto en el art. 54 del decreto-ley 8.904/77.

Así las cosas, la excepción de pago fue correctamente rechazada por el juez en la sentencia apelada, por lo que el agravio del ejecutado al respecto no es de recibo (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.).

VI.1.2.- Ahora bien, observo que pese al tiempo transcurrido desde que las sumas depositadas en los autos principales fueron puestas de manifiesto (v. fs. 641: 13-10-2017), aún no se encuentran disponibles para el acreedor y prueba de ello es que al día de la fecha están discutiendo los parámetros para liquidar los intereses.

No obstante, esta última circunstancia no viabiliza la excepción de falsedad de la ejecutoria interpuesta por el Sr. Yancoski con fundamento en la falta de liquidez de la deuda.

Aun cuando las partes han alongado el debate en relación a los intereses aplicables a los honorarios regulados al Dr. Sobrino (toda vez que en un comienzo lo hicieron en los autos principales de conformidad a las liquidaciones a las que hice referencia *supra* y, a su vez, en el marco de la presente ejecución de sentencia en reclamo de los honorarios impagos), lo cierto es que en relación al Sr. Yancoski, esta ejecución transita por el carril previsto en el art. 498 inc. 3° del C.P.C. por ser condenado en costas en las actuaciones principales en base a una resolución judicial firme y ejecutoriada en materia de honorarios.

En otras palabras, lo que aquí se ejecuta es un monto fijado en concepto de honorarios, conforme a un pronunciamiento que ya contiene una suma líquida y determinada para este tipo de crédito (arts. 497, 498, 500, 501 y conc. del C.P.C.C.).

En tal inteligencia, la excepción de falsedad de la ejecutoria no es procedente, por lo que corresponde desestimar el agravio formulado por el ejecutado Sr. Yancoski sobre el tópico (arts. 242, 246, 270, 504 inc. 1° y conc. del C.P.C.C.).

VI.1.3.- Los agravios relativos a los intereses y a la imposición de las costas lo haré por separado. En el primer caso por tratarse de un planteo que abarca también el embate del ejecutante, y en el segundo para analizarlo al final del análisis en función de la temática en juego que está íntimamente vinculada a las resultas de las quejas anteriores.

VI.2. Recurso del coejecutado Osvaldo Menossi:

El art. 84 del C.P.C.C. determina que *"El que obtuviere el beneficio estará exento total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba"*.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han interpretado que el artículo, al referirse a los "valores que reciba", condiciona su aplicación a la efectiva percepción de ellos, no siendo suficiente pues, que la sentencia definitiva se haya limitado a reconocer un crédito o un derecho a favor del beneficiario (esta Sala, causa nro. 105.320, RSI 728 del 27-12-2013; López Mesa, "Código...", La Ley, Bs. As., 2012, T.1; p. 646 y 647).

En el caso, el Dr. Sobrino fue patrocinante del Sr. Menossi, quien obtuvo el beneficio de litigar sin gastos de manera definitiva el día 11-6-2003 y también, como se consignó en los considerandos anteriores, obtuvo sentencia favorable a la pretensión entablada (v. fs. 244/245) que a la fecha se encuentra pendiente de cumplimiento.

De allí que, amén de no haberse demostrado la mejora de fortuna mediante la declaración judicial pertinente (art. 82 del C.P.C.C.), lo cierto es que tampoco la presente ejecución de honorarios de quien fuera su letrado es procedente ni en la limitación señalada por el juez en virtud a los parámetros del art. 84 del ritual.

En efecto, la sentencia dictada a su favor configuró una condena a escriturar (art. 510 del C.P.C.C.) que aún está pendiente de satisfacción (v. causa n° 78.547 *in re "Menossi, Osvaldo c/ Yancoski, Rodolfo s/ Ejecución de sentencias"* en <https://mev.scba.gov.ar>, sitio visitado por última vez el 16-4-2019), por lo que no se configura en el caso el supuesto previsto en la norma referido a la efectiva "percepción de valores".

A todo evento, y tal como lo expuse en los autos "*Machado, Gladys c/ Aito S.R.L. s/ Daños y perjuicios*" (causa nro. 144.535, RSD 122 del 30-5-2013), no puedo dejar de observar que participo de la idea que la mejora de fortuna a la que alude el art. 84 del ritual importa una condición resolutoria, vale decir hasta que no se demuestre que la mejora económica ha ocurrido, no renace la obligación por el pago de las costas y gastos del juicio, pesando en cabeza del acreedor la promoción del incidente respectivo (arts. 175 y 375 del C.P.C.C.).

A su vez, en los autos "*Villar, Mariana G. c/ Ulvedal, Basilio A. s/ Ejecución de honorarios*" (causa nro. 161.790, RSD 262 del 31-10-2016) tuve oportunidad de afirmar que la regulación prevista en los arts. 889 al 891 del reciente CCyC no varía la postura que venía defendiendo, pues el debate plazo/condición de las obligaciones que la ley sustancial califica como de "pago a mejor fortuna" se lo ha resuelto en el ámbito del derecho de las obligaciones y haciendo foco en aquellas que poseen fuente contractual, donde media un acuerdo de voluntades entre "partes" que libremente acuerdan los alcances y la modalidad de una relación jurídica. Ninguna aplicación tiene este tipo de obligación en el ámbito del proceso judicial, y del beneficio de litigar sin gastos: aquí no hay acuerdo de partes, no hay razón para considerar inexorable aquello que es eventual y contingente (de allí lo condicional), y -por último- no hay motivo para asignarle al beneficiario condenado en costas la carga de demostrar nuevamente (frente a una pretensión de cobro) una circunstancia que ya fue verificada en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada formal.

En suma, el recurso del coejecutado Sr. Menossi es procedente, debiendo admitirse la excepción, la que debe calificarse *-iura novit curia-* como falsedad de ejecutoria por falta de legitimación pasiva (y no de inhabilidad de título), rechazándose la presente ejecución en su contra, con costas al Dr. Sobrino en ambas instancias conforme su calidad de vencido (arts. 34, 68, 69, 242, 245, 274, 556 y conc. del C.P.C.C.).

VI.3.- Recurso del ejecutante Dr. Sobrino:

VI.3.1.- Tasa de interés de los honorarios: en lo que respecta a la tasa de interés que corresponde establecer para los honorarios en ejecución, esta Sala tuvo oportunidad de resolver en los autos caratulados "*Ribak, Néstor c/ Casa, David s/ Cobro de honorarios*" (expte. nro. 161.150, RSD 110 del 12-5-2016) con voto preopinante del Dr. Roberto J. Loustaunau -al que adherí- que ya no existen motivos para seguir la doctrina legal del cimero Tribunal con sede en La Plata en autos "*Isla, Sara c/ Provincia de Buenos Aires S/ Amparo*" (Q. 71.170 del 10-6-2015), en virtud del cambio de circunstancias que ha importado la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial a partir del 1-8-2015 (conf. ley 26.994), es decir, luego del dictado de aquel precedente, lo que justifica su apartamiento (causas nro. 140.112, RSI 305 del 8-8-2017, entre otras).

VI.3.1.1.- En dicha oportunidad se puso de manifiesto que luego de la sanción de la ley de convertibilidad que prohíbe la repotenciación de las deudas, actualización monetaria o indexación de precios (reafirmada por la ley 25.561), la cuestión en torno a la vigencia de la tasa legal de interés a calcular sobre los honorarios de los abogados fue objeto de diferentes pronunciamientos de la Suprema Corte provincial, en orden a indicar si ese interés es violatorio de la prohibición, por tener o no un componente de ajuste por depreciación monetaria.

Ha pasado de considerar su derogación en el caso “*Yabra*” (27-2-1996), mandando a aplicar la tasa pasiva del Banco de la Provincia en sus operaciones de depósitos a 30 días, a considerarla vigente en “*Banco Comercial de Finanzas*” (19-4-2006), para luego volver sobre sus pasos en la causa “*La Proveedora Industrial*” (13-7-2011), retomando la primera postura.

La cuestión volvió a ser tema de decisión en la sentencia dictada por el Superior Tribunal en la causa “*Isla*” (10/06/2015) en la cual se confirmó la posición en cuanto a la derogación tácita de la norma.

Con estas referencias, el efecto vinculante de la doctrina legal de la Corte (art. 278 del C.P.C.C.) haría aplicable, sin mayores miramientos, la solución desestimatoria de la tasa legal, pero el cambio de circunstancias que ha importado la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial a partir del 1º de agosto de 2015 (ley 26.994), luego del dictado de los precedentes, justifican el apartamiento de esa doctrina.

El nuevo cuerpo normativo prevé en su art. 552 la aplicación de la tasa activa bancaria más alta según reglamentaciones del B.C.R.A. para las deudas alimentarias. En la medida que las leyes 23.928 y 25.561 no han sido derogadas, esta solución del legislador implica necesariamente la idea de que dicha tasa no constituye un mecanismo de repotenciación de deudas, actualización monetaria o indexación de precios, cuya prohibición sigue vigente.

De este modo, tratándose el código de una ley nacional de igual rango que las mencionadas (art 75 inc 12 C.N.), desde un orden lógico no cabe otra interpretación que la contraria a la doctrina de la S.C.J.B.A. que es de fecha anterior a la entrada en vigencia (este criterio ha sido adoptado por la Sala I de este Tribunal, causa nro. 160.135 “*Rendo*” del 23/02/2016; la Sala III de la Cám de Apel. Civil y Comercial de San Isidro, causa nro. E-9517-2003 “*Automotores Colcam*” del 30/09/2015 y la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, causa nro. 117.076 “*Seoane*” del 22/02/2016).

Por otra parte, los jueces debemos aplicar la ley vigente pues constituye la principal fuente de derecho (art 1 CCyC) y en los casos que la consideremos injusta al caso, para dejarla de lado es preciso declarar su inconstitucionalidad, siempre que vulnere derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional o los Tratados y Convenciones Internacionales con igual jerarquía (art 75 inc 22 CN). Lo contrario deja a la decisión desprovista de legalidad.

El art. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 es claro sobre la tasa de interés que debe aplicarse, y resulta reiterada la directiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido en que “*cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con*

prescindencia de otras consideraciones" (Fallos 324:1740; 3143; 3145), pues *"la primera fuente de exégesis de la ley es su letra"* (Fallos: 316:1249), y en tanto *"si no se procede así, se corre el riesgo de prescindir del texto legal sin declararlo inconstitucional"* (Fallos: 323:3139; Sagüés, Néstor P. *"interpretación constitucional y alquimia constitucional"* en JA ejemplar del 26.11.03 páginas 62 y siguientes).

VI.3.1.2.- Frente a este panorama, corresponde desestimar la pretensión del Sr. Yancoski de aplicar al capital de condena los intereses conforme las pautas fijadas por el precedente "Isla", toda vez que la suma reconocida en la sentencia tiene su origen en la falta de pago de los honorarios regulados a favor del Dr. José Sobrino en los autos "Menossi, Osvaldo c/ Yancoski, Rodolfo s/ Cumplimiento de contrato" (exp. n° 69.323 de trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 deptal.), sumado a que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial permite inferir que la tasa de interés prevista por el inciso "b" del art. 54 del decreto-ley 8904/77 no constituye un mecanismo de indexación o actualización encubierto. De modo que, en atención a la mora en la que incurrió el obligado al pago, al capital de condena deben adicionarse los intereses a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días, desde la mora y hasta el efectivo pago (art. 622, 744 y conc. del Cód. Civ.; arts. 768 inc. "b", 870 y conc. del CCyC).

VI.3.1.3.- Ahora bien, le asiste razón al Dr. Sobrino en su embate en cuanto a que los términos y alcances del art. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 deben considerarse hasta el día 20-10-2017, pues a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de honorarios, debe estarse a la tasa prevista en el art. 54 inc. "b" de la ley 14.967, que remite al interés previsto en el art. 552 del CCyC (tasa de interés más alta que cobran los bancos a sus clientes según las reglamentaciones del B.C.R.A.).

Y es que tratándose de una controversia suscitada por la falta de pago de una obligación de dar sumas de dinero el devengamiento de los "intereses moratorios" no es más que una "consecuencia" que se sucede en el tiempo respecto a una relación jurídica existente a la época de la sanción del nuevo ordenamiento, por lo que a su respecto corresponde la aplicación inmediata pero sin efectos retroactivos (Sala III, con la integración del suscripto y el Dr. Loustaunau, causa nro. 163.091, RSD 141 del 21-6-2017, entre otras).

En otras palabras, los intereses devengados y no abonados son "consecuencias" ya consumadas de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, y por lo tanto deben regirse a los fines de su liquidación por la ley vigente al momento de cada vencimiento (esto es: decreto-ley 8904/77 para los anteriores al 21-10-2017 y la nueva ley 14.967 para los posteriores).

Esto implica, por ende, que el cálculo debe hacerse necesariamente en dos tramos: **a)** los devengados desde la fecha de la mora (30-3-2014) hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley arancelaria 14.967 (20-10-2017) de conformidad con el art. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 y **b)** los devengados a partir de dicho hito temporal (21-10-2017) hasta el efectivo pago de acuerdo al art. 54 inc. "b" de la ley 14.967 (Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones Jurídicas existentes"; Rubinzal Culzoni; Buenos Aires, 2015, pág. 28; cit. a Moisset de Espanés, Luis; "El daño moral (arts. 522 y 1078 del CC y la irretroactividad de la ley (art. 3°)", JA 13-1972-356).

En suma, corresponde desestimar el agravio formulado por el Sr. Yancoski y receptor el del Dr. Sobrino sobre esta materia (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.).

VI.3.2.- De los depósitos realizados en el principal:

Asiste razón al ejecutante en cuanto a que el juez parte de una premisa fáctica errónea al afirmar que en la oportunidad de practicarse la liquidación pertinente debían descontarse "*los montos ya percibidos en el principal conforme prelación legal*" (*sic*), ya que el accionante no ha percibido a la fecha suma alguna fruto de la controversia suscitada en torno a la liquidación de la acreencia pendiente de aprobación.

Es más, para que las sumas de dinero depositadas en la cuenta judicial, de manera voluntaria (pago) o compulsiva (embargo), tengan efectos extintivos de la obligación cuya cancelación procuran, el *accipiens* debe encontrarse debidamente anoticiado del depósito y, a su vez, tratarse de fondos que queden efectivamente a su disposición (S.C.J.B.A., Ac. 91.817 del 19-9-2007).

En otras palabras, recién en el momento en que el acreedor se halle en situación de poder retirar el monto depositado puede afirmarse que el deudor ha cumplido y analizarse, eventualmente, la posible existencia de mora del acreedor en el retiro (esta Sala, causa nro. 162.954, RSD 290 del 27-11-2017, entre otras).

En el caso, el coejecutado Yancosky pretende sustentar su planteo defensivo relativo al pago en las sumas depositadas en la cuenta judicial de los autos principales a fs. 637/641, entendiendo que ello resulta suficiente para dotar de virtualidad cancelatoria.

Sin embargo, advierto que no puede accederse a tal pedido toda vez que, tanto a esa fecha como ahora, aún restan cumplimentar una serie de actos en el proceso que condicionan la posibilidad de la efectiva extracción por parte del ejecutante.

Y es que, en definitiva, los fondos depositados no se encuentran a disposición del acreedor sino hasta que puedan efectivamente percibirlos, una vez cumplidos los recaudos arancelarios, fiscales y previsionales (art. 41 del decreto-ley 8904/77; arts. 295 y 296 del Cód. Fiscal; art. 21 de la ley 6716; doct. esta Sala, causa nro. 139.9443, RSI 662 del 13-12-2011, entre otras).

Por lo tanto, hasta que no se encuentre aprobada la liquidación de los créditos cuya ejecución se persigue a través del presente proceso (arts. 498 inc. 3, 508, 557 y 589 del C.P.C.C.), se hayan regulado y percibido (o al menos afianzado) los honorarios profesionales por el trámite de la ejecución de sentencia (art. 41 del decreto-ley 8904/77) y se hayan cumplido los recaudos previsionales y fiscales correspondientes (art. 21 de la ley 6.716 y arts. 340 y 341 del Cód. Fiscal), los fondos depositados en la cuenta judicial del expediente principal no se encuentran a disposición del acreedor (esta Sala en causa n° 139.9443 RSI 662 del 13-12-2011, 94.416 RSI 520 del 4-11-2014, entre otras).

Por lo expuesto, cabe receptor la queja formulada por el ejecutante en lo que a este agravio concierne (arts. 242, 246, 270, 498 inc. 3, 508, 557, 589 y conc. del C.P.C.C.).

VI.4. De las costas de la ejecución:

Recuerdo que las costas en la ejecución de sentencia se imponen al vencido, por aplicación analógica de las normas del juicio ejecutivo (arts. 508 y 556 del C.P.C.C., conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos...", Librería Editora Platense, La Plata, 1994, 2° ed., t. VI-A, p. 147)

En el juicio ejecutivo rige un sistema específico en materia de costas, distinto del general del art. 68 del C.P.C.C., por estimar que es el que mejor se corresponde con la esencia y función de este tipo procesal. El cobro lleva aparejado como consecuencia determinada la imposición de costas al ejecutado. Se consagra lisa y llanamente el principio objetivo del vencimiento, sin que pueda el juez eximir del pago al vencido "siempre que encontrare mérito para ello" (S.C.J.B.A., Ac. 90.557 del 17-2-2008; Ac. 95.517 del 4-11-2009; esta Sala en causa n° 158.536 RSD 52 del 12-5-2015; v. asimismo: Morello-Sosa-Berizonce, ob. cit., t. VI-B, p. 357).

En el caso, las costas por el rechazo de la pretensión ejecutiva respecto del Sr. Menossi, como dije antes, deberán ser soportadas en ambas instancias por el Dr. Sobrino por resultar vencido en los términos de los arts. 68, 274 y 556 del C.P.C.C. a su respecto.

Por su parte, el coejecutado Sr. Yancoski deberá cargar con las costas generadas en ambas instancias por las defensas interpuestas y rechazadas, conforme el principio antes explicado (arts. 68, 274 y 556 del C.P.C.C.)

En consecuencia, cabe rechazar el embate del Sr. Yancoski en lo que a este agravio concierne (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.).

VII. De acuerdo a todo lo expuesto, propongo a mi colega que se haga lugar al recurso de apelación deducido por el Dr. Sobrino, que se rechace el recurso de apelación deducido por el Sr. Yancoski y que se admita el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Menossi.

Las costas deberán modificarse e imponerse conforme lo determinado en el considerando "VI.4".

Por las razones expuestas **VOTO POR LA NEGATIVA.**

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. ROBERTO LOUSTAUNAU DIJO:

Limito mi disidencia al recurso del co-ejecutado Menossi que, a mi juicio, debe ser rechazado.

a) No coincido con el efecto atribuido al beneficio de litigar sin gastos (art. 84 del C.P.C.).

Esa diferencia que mantengo, registra como antecedente lo expuesto en la causa n° 144.535 caratulada: "Machado, Gladys A. c/ Aito S.R.L. s/ Daños y Perjuicios" (RSD 122 del 30-5-2013) y tiene mayor amparo aún en el nuevo Código Civil y Comercial vigente, que ya no permite abrigar dudas en cuanto establece expresa y literalmente que la obligación de pago a mejor fortuna es a plazo indeterminado (art.889 del CCyC), y **que en caso de reclamo, el deudor tiene a su carga la prueba de que su estado patrimonial le impide pagar** (art.890 del CCyC).

Por ello, entiendo que continuar sujetando la suerte del reclamo a la previa demostración de la efectiva mejora de fortuna del deudor, haciendo prevalecer una interpretación de la ley procesal, anterior a la ley sustancial nueva, y sobre cuestiones que ella no trata -ni puede tratar- como las modalidades de los actos jurídicos, es incorrecto.

b) Ante la imposibilidad de colocar al recurrente en peor situación que aquella en la que se encontraba antes de apelar (prohibición de la reformatio in pejus, conf. S.C.B.A., C. 97490 del 15/6/2011, C. 102644 del 27/4/2011), es evidente que -en el caso- la cuestión a analizar debe circunscribirse a la posibilidad de ejecutar los honorarios hasta el límite del tercio de los bienes incorporados del art. 84 última parte del C.P.C.

En mi opinión, corresponde una interpretación amplia de lo que constituyen los "valores que perciba", entendiendo que debe incluir los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria de los que goza el beneficiario, sin que -a fin de medir su capacidad de pago de los honorarios profesionales y evitar un enriquecimiento injusto- sea menester requerir o esperar el acabado cumplimiento del acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley (art. 1892).

Al respecto se dijo que "En tales supuestos el vencedor del proceso y beneficiario de la franquicia de pobreza deberá abonar o garantizar la percepción de los honorarios del letrado que lo asistió tomando como tope el 30% del valor de la cosa que recibió con motivo del pleito o del interés jurídico comprometido en el que triunfó." (el caso trataba de una escrituración, v. Sala III, en causa n° 158.476 RSI 84 del 11-3-2015)

Esta solución, que llega hasta el 33% del bien recibido, se presenta razonable a fin de desalentar la mora en la incorporación del bien al patrimonio, impidiendo la negligencia de quien se ha visto beneficiado por el trabajo de su abogado y burla el crédito al no activar la escrituración. Ello sin perjuicio de que el acreedor opte por el ejercicio de otras acciones que como acreedor puedan corresponder (art. 739 y sstes. del CCyC y 111 y sstes. del C.P.C.)

Por lo tanto, el recurso del Sr. Menossi no es procedente, debiendo confirmarse la sentencia apelada en este sentido, con costas a su cargo (arts. 68, 69, 242, 245 y cctes. del C.P.C.)

En las demás cuestiones, coincido con el voto de mi distinguido colega.

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. RUBÉN D. GÉREZ DIJO:

Considerando que, como el propio Dr. Loustaunau expresa, la cuestión a a analizar -y motivo de disidencia- debe circunscribirse a la posibilidad de ejecutar los honorarios hasta el límite del tercio de los valores que reciba, presto mi adhesión a lo decidido por él en el punto **b)** de su voto, entendiendo que con ello se alcanza la mayoría de fundamentos necesarios para el dictado de un pronunciamiento válido (art. 168 del C.P.B.A.)

En efecto, su voto sigue el sentido de lo resuelto por la Sala que naturalmente integro (Sala III) dejando allí plasmada mi opinión en los autos "QUINTEROS LILIANA RUTH C/ LIMA WALTER OSVALDO S/ ESCRITURACIÓN ART. 250" - EXPTE. N° 154.476, sent. del 11/03/2015.

Para las demás cuestiones, tal como lo hace el Dr. Loustaunau, coincido con lo propuesto por el Dr. Ricardo Monterisi.

ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO:

Corresponde -por mayoría-, hacer lugar al recursos de apelación deducido por el Dr. Sobrino modificando la sentencia atacada de fs. 139/143 con los alcances indicados, con costas al coejecutado Yancoski y rechazar los recursos de apelación deducidos por los Sres. Yancoski y Menossi, con costas a cargo de los vencidos (arts. 68, 242, 246, 270, 274 y 556 del C.P.C.C.).

ASÍ LO VOTO.

LOS SRES. JUECES DRES. ROBERTO J. LOUSTAUNAU Y RUBÉN D. GÉREZ VOTARON EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

En consecuencia se dicta la siguiente

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, por mayoría, se resuelve: **I)** Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Dr. Sobrino, modificando la sentencia atacada de fs. 139/143 con los alcances indicados, con costas al coejecutado Yancoski (arts. 68, 242, 246, 270, 274, 556 y conc. del C.P.C.C.). **II)** Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el coejecutado Menossi, confirmando la sentencia atacada de fs. 139/143 en lo que fue materia de agravio, con costas a su cargo (arts. 68, 242, 246, 270, 274, 556 y conc. del C.P.C.C.). **III)** Rechazar el recurso de apelación deducido por el ejecutado Yancoski, con costas a su cargo (arts. 68, 242, 246, 270, 556 y conc. del C.P.C.C.). **IV)** Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). **REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE** (art. 135 del C.P.C.C.). **DEVUÉLVASE.**

RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU

RUBÉN D. GÉREZ

ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----

[Volver al expediente](#) [Imprimir](#) ^